

La ruptura subversiva de la derecha

La actitud del PP en esta legislatura es estratégica: desarrolla una temeraria operación para ponerse al frente de un movimiento populista y antipolítico y desprestigiar al Estado y sus instituciones.

BASILIO BALTASAR

En contraste con el aspecto de registrador de la propiedad que le caracteriza, Mariano Rajoy adopta un tono desenfadado para excitar la risotada de su público. Consciente de la impaciencia que padecen sus seguidores, se propone alimentar su despecho y ridiculiza el consenso científico internacional sobre las nefastas consecuencias del cambio climático.

José María Aznar ya no es el dignatario abrumado de otro tiempo y con alegría ofrece a los suyos ingeniosos motivos de entusiasmo. Agasajado en Valladolid con la distinción de Bodeguero de Honor de la Academia del Vino, Aznar levanta su copa para consolar a los que están hartos del control gubernamental. Vamos a fumar, beber y conducir como nos plazca, dice en un alarde de campechano orgullo popular.

El diputado Vicente Martínez Pujalte, repantigado en su asiento, soporta con desgana la amonestación del presidente del Parlamento y levanta las cejas con asombro entre la hilaridad de sus compañeros de partido. Antes de abandonar el hemiciclo hace una última reverencia no sin advertir que volverá a deleitar a los suyos con esa figura tan arraigada en la tradición popular española: el gamberro vociferante y maleducado, ajeno al ridículo y la vergüenza que su presencia impone.

Con su apacible hábito cardenalicio, Jaime Mayor Oreja interviene en medio del barullo para recordarnos la sobremesa que en pleno franquismo unía a la familia alrededor del parchís.

Aunque estos episodios nacionales puedan parecer anécdotas chusqueras, rasgos de un carácter estentóreo, la irreflexiva concesión a un público nervioso o la nostalgia que desfigura la vulgar tiranía del régimen franquista, lo cierto es que pertenecen a una temeraria operación política.

El grave deterioro ocasionado al Tribunal Constitucional, mediante maniobras inconcebibles entre magistrados supuestamente investidos para interpretar el espíritu de la ley; los ataques que la radio de los obispos emite contra el rey Juan Carlos, exigiendo la abdicación del Monarca, y la marabunta de embusteros lanzada como una jauría contra los policías, fiscales y jueces que han investigado y juzgado los atentados del 11-M, son acciones orquestadas con la misma osadía.

Al principio podía parecer que la derecha, enojada por la derrota electoral del 2004, no hacía más que ejercer, con sus insidias, el derecho al pataleo y que al final se mostraría dispuesta a purgar su amargo disgusto. Pero pasado el tiempo, las embestidas de la derecha contra la Corona, el Poder Judicial, el Parlamento, las normas de la Dirección General de Tráfico, los estudios científicos sobre el cambio climático, las evidencias del sentido común y los requisitos dialécticos de la razón democrática, nos van descubriendo el alcance de la intrépida estrategia desplegada por el Partido Popular. No es que pretenda aprovechar los fallos del Gobierno socialista, ni dar forma al desagrado que la población española siente por el dislate autonómico, ni propiciar la corriente de simpatía ciudadana que haga

factible una futura mayoría parlamentaria, tampoco L intentará convencer a la opinión pública de las supuestas bondades de su programa. Pues a la derecha Española ya no le interesa el arte de la política. Aunque eventualmente se vea obligada a manejar discursos en los que ya no cree, dedica sus energías a consolidar el fundamento ideológico que ha elegido como promesa y horizonte.

Entre otras urgencias, la instrucción doctrinal de la derecha define un doble plan. Por un lado, capitanear un movimiento antipolítico con las más tenaces presunciones de la ignorancia popular.

Un estado de ánimo colectivo ensalzado por los brutos que celebran denostar lo que no entienden. Ya sea el cambio climático, cuya complejidad les asusta, o la sofisticación jurídica del derecho de gentes, cuya demora les irrita. El hábito de la sospecha difundido por los publicistas de la derecha a tal efecto ha sido una ejemplar manifestación de astucia. Pues el recelo que proponen como método de pensamiento será siempre irrefutable, inaccesible a la deliberación e impermeable al sentido moral de la duda razonable.

La segunda parte del plan de la derecha española es hacer cada día más agudo el desprestigio de las instituciones, contribuir como sea al deterioro de su imagen entre la ciudadanía y echar por tierra el arduo trabajo de restauración llevado a cabo en los tiempos de la Transición. En resumen, el objetivo de esta agitación populista es arrebatarse a las instituciones del Estado su carisma y hacer irreconocible el pacto social implícito en su funcionamiento. Una liquidación simbólica que a su vez impulsará la corriente de opinión hostil al uso reflexivo de la razón ilustrada.

No es extraño que la pretensión irresponsable y belicosa de la derecha genere una corriente de estupor como no se había visto desde el estreno de la democracia. Hasta ahora lo sustancial del pacto constitucional ha consistido en compartir de buen grado las deficiencias del sistema y subsanarlas con la categoría política y profesional de los responsables de su buen gobierno. Una alianza de estabilidad que obligaba a las fuerzas políticas a disimular las insuficiencias del Estado —la escasa “independencia” de sus tres poderes, por ejemplo— mediante un acuerdo inteligente sellado para proteger el desarrollo democrático de la sociedad.

Que una de las fuerzas constitucionales haya decidido aprovecharse de las deficiencias a cuya custodia se había comprometido supone una ruptura en el paradigma elegido para gobernar España. Un quiebro que modifica la relación entre las fuerzas políticas y sociales de un país sorprendido e intrigado por la temeridad, la osadía y la intrepidez del principal partido de la oposición: el partido que deja en evidencia, con estrépito burlesco, las fallas del sistema constitucional, renuncia a la respetabilidad y adopta una impetuosa estrategia subversiva.

Esta actitud, sin embargo, no es fruto del capricho ni del oportunismo resentido. No influye en su origen la furia ofendida de los derrotados por las urnas ni la personalidad recalcitrante de su líder. La transformación de la derecha española procede de una reflexión ideológica sobre su dubitativa evolución, de una sincera meditación sobre el futuro de su acción política en el seno de unas instituciones reguladas por los artificios de la razón y de un profundo desengaño.

La primera gran decepción ha sido comprobar la caducidad de su creencia decimonónica, pues el Estado ya no es la cámara acorazada de los intereses que la derecha gestiona. En la segunda gran decepción se hunde después de contemplar el descomunal aparato legislativo y judicial que el Estado en Europa garantiza a sus ciudadanos y que la derecha debe administrar cuando gobierna.

Para la derecha más reaccionaria estas contrariedades sólo pueden significar una cosa: el progresivo aumento del control estatal sobre los negocios que afecten a los derechos de los ciudadanos. El rechazo escandalizado a la deriva "intervencionista" del Estado ha madurado gradualmente hasta convertirse en la más firme convicción de los actuales líderes del Partido Popular. Fue intuitiva y errática mientras careció de referencias tangibles, pero su trascendental encuentro con la poderosa corriente de los *neocons* anglosajones ha sido tan revelador como renovador. Orientada por esta decisiva influencia, la derecha española posee al fin el arrojo necesario para reconocer el estorbo de un Estado que argumenta las restricciones, consensúa los límites y aplica las leyes aprobadas mediante el uso de la razón.

La derecha reaccionaria *globaliza* este repudio y no por casualidad se ve secundada en su labor de agitación y propaganda por sus respectivos aliados religiosos: los predicadores televisivos en la América de Bush y los predicadores episcopales y radiofónicos en la España del PP.

Para sabotear al molesto Estado legislador no basta reventar sesiones parlamentarias con sonoras broncas o aprovechar maliciosamente el reglamento institucional. Para debilitar la autoridad de la razón hay que reinventar el odio a la Ilustración, propiciar a cualquier precio el retorno de los brujos, divulgar sus oscuras creencias y restaurar el caudal de supersticiones que enturbian el discernimiento.

Esta alianza de la derecha española con el poder religioso no es nueva, ciertamente, pero vuelve a ser imprescindible para escenificar la ruptura subversiva que su movimiento antipolítico proclama a los cuatro vientos.

El País, 7 de noviembre de 2007